

FJG

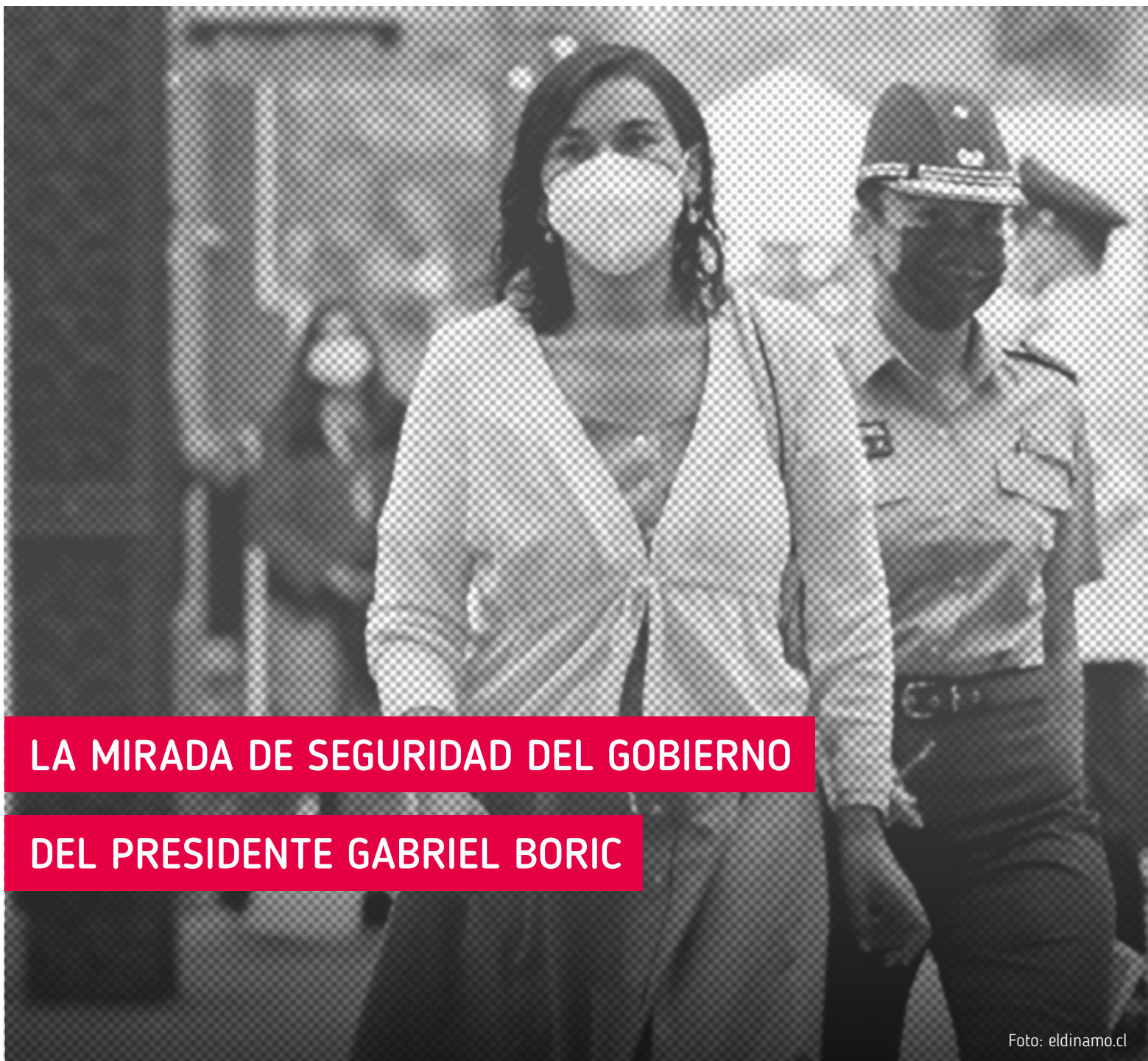
FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN



#2202
Edición

MIRADA POLITICA

MARZO
2022



LA MIRADA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO

DEL PRESIDENTE GABRIEL BORIC



Foto: latercera.com

I. INTRODUCCIÓN

La fracasada reunión de la ministra Siches en La Araucanía con miembros de las comunidades mapuches de Temucuicui, la que terminó en disparos y con un rápido éxodo de las autoridades hacia el resguardo policial del que en un inicio rehuyeron, no solo es muestra de arrogancia e inexperiencia de la nueva ministra sino que es reflejo de una concepción errada del gobierno respecto de cuál es el enfoque que sus propuestas de seguridad deben tener para enfrentar los conflictos que se viven en distintas zonas del país.

En materia de seguridad, el programa de gobierno de la nueva administración trata principalmente de temáticas referentes a cambios estructurales de las Policías que buscan reivindicar su supuesta falta de efectividad en zonas de conflicto —especialmente en La Araucanía—, el favorecimiento del diálogo hacia las comunidades indígenas como salida a

dichos conflictos y el someter el uso de la fuerza estatal al control del poder civil.

Si bien es cierto que las policías requieren cambios estructurales con el fin de mejorar su eficiencia —mejoras cuya tramitación legislativa inició durante la administración del ex presidente Piñera—, el programa del presidente Boric está teñido de una mirada ideológica que refleja la superioridad moral que aqueja a sus autores, una latente falta de realismo e, incluso, un dejo de ingenuidad respecto de la capacidad de negociación de la izquierda más dura de Chile como cabeza del poder Ejecutivo.

Para entender la relación entre dicha mirada ideológica y poco efectiva de resolución de los problemas de seguridad, especialmente en La Araucanía, repasaremos brevemente los puntos principales del programa del actual gobierno en materia de seguridad y orden público.



Foto: m.elmostrador.cl

II. PRINCIPALES PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD: REFUNDACIÓN DE CARABINEROS Y MAYOR DIÁLOGO

1) Modernización institucional

El programa asume que la inseguridad en distintos barrios y zonas se debe a la falta de capacidad técnica de las policías, así como de su imposibilidad de formular y mantener políticas de Estado DE Seguridad Pública de largo plazo. Dicho déficit afectaría de manera estructural la arquitectura de la institucionalidad en Chile.

Propuestas concretas:

- Creación de un nuevo Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. Su necesidad se fundamentaría en la necesidad de priorizar las materias de seguridad y que al

radicar estas en el Ministerio del Interior, quedarían en segundo plano en la toma de decisiones.

- Modernización de la Policía de Investigaciones.

2) Reestructuración de Carabineros de Chile

En esta materia, el programa de gobierno no solo incluye la intención de profesionalizar la carrera de Carabineros sino el reforzar la institucionalidad civil de la seguridad. Si bien reconoce que el proceso de reforma se inició durante el gobierno saliente, especifica que dicha reforma “consideró la creación de la Unidad Coordinadora de la Reforma durante el año 2020,

respondiendo a una medida planteada por dos propuestas distintas de reforma policial. Sin embargo, su propósito nunca fue bien definido, careciendo de capacidad resolutoria real”¹.

En virtud de lo anterior, el nuevo gobierno propone algunos de los siguientes ejes de transformación policial:

- Modificación del sistema de formación de Carabineros con el fin de que la ejecución de las medidas de resguardo del orden público se dé con respeto pleno a los Derechos Humanos y en defensa de todas las personas y de sus derechos.
- Control civil del sistema de seguridad con el fin de mejorar su legitimidad a través del control democrático de la fuerza pública, reforzando la subordinación de Carabineros al poder civil.

3) Conflictos territoriales

El programa hace énfasis en la urgencia de “reducir los niveles de conflicto territorial actuando a tiempo antes de que se transformen en problemas criminales”². Con ello no solo se refiere al conflicto en La Araucanía, sino también a aquellas zonas en distintas comunas del país que se han

vuelto focos de delincuencia e inseguridad, calificados como zonas de sacrificio de exclusión.

Propuestas concretas:

- Creación de una Estrategia Nacional de Resolución Pacífica de Conflictos y de Convivencia, en conjunto con los gobiernos regionales y municipales, con el fin de favorecer el diálogo.
- Nuevo sistema de control de armas y municiones: para “cortar la ruta de las armas y municiones”³. Para lo anterior, entre otras cosas, se propone ampliar la prohibición de porte de armamento a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden retirados.
- Sustitución de la “Ley Antiterrorista” por una nueva ley que busque resguardar la vida democrática conforme estándares internacionales de derechos humanos⁴.
- Restitución territorial para facilitar el ejercicio del derecho a la autonomía indígena⁵.
- Creación de una Comisión de Verdad, Esclarecimiento Histórico Intercultural y Reparación integral⁶.

¹ Disponible en: <https://bit.ly/3CQ9ohz>

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Disponible en BBC Noticias: <https://bbc.in/3lmtYAV>

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

III. LA VISITA DE LA MINISTRA SICHES A LA ARAUCANÍA

La mañana del pasado 15 de marzo la ministra del Interior, Izkia Siches, pidió ir con su escolta, policías de civil y sin vehículos blindados a visitar una de las zonas más complejas de la macrozona sur: Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía. Lo anterior, pese a las advertencias previas de Carabineros sobre la peligrosidad de la zona y el antecedente conocido públicamente de los más de 1.200 atentados registrados solo durante el año 2021 y los 8 homicidios ocurridos solo en el transcurso del presente año.⁷

Camino al encuentro, y restando solo 300 metros para ingresar a la zona donde se reunirían con dirigentes de las comunidades indígenas, se escucharon disparos provenientes desde los bosques colindantes, además de alertarse sobre un corte en la Ruta R-50 consistente en una barricada de grandes dimensiones. En paralelo, desde una camioneta roja que acompañaba a la comitiva, uno de los presentes, subió al pick up del vehículo e izó una bandera mapuche, en señal de paz hacia quienes protagonizaban el corte de ruta.

La comitiva optó por escapar hacia el cuartel de Carabineros de Peilahueque, siendo escoltados por vehículos blindados de las policías, protocolo activado por el jefe de Zona de la Araucanía, Marcelo Bobadilla. Estando en la unidad

policial, la ministra fue consultada respecto de su intención de interponer una denuncia, opción que declinó.

Fue, según puede verse y lo señalado tanto por Marcelo Catrillanca y el Lonko de Temucuicui, Víctor Queipul Huaiquil, una visita improvisada que puso en riesgo las vidas de la ministra y su comitiva e hizo caso omiso a las advertencias de Carabineros y protocolos de la zona. Incluso, la convencional Rosa Catrileo se refirió a los hechos indicando que “el protocolo mapuche no es llegar e ir a una casa”⁸.

Posterior al ataque a la ministra, la policía dio con la primera reivindicación de lo ocurrido, encontrando en el Puente Tricauco, a pocos kilómetros de la Ruta R-50, un vehículo incendiado y un panfleto dirigido a la ministra “*Izkia Siches, mientras existan presos políticos mapuches, no habrá diálogo. Por Kamilo (sic) Katrillanca y todos los caídos en combate. En Wallmapu no aceptaremos ningún soborno de Estado asesino. Resistencia Mapuche*”⁹.

Ya de regreso, la ministra descartó continuar con el Estado de Excepción en el sur, señalando que la violencia no los detendrá ni cambiarán el itinerario en la zona, y anunció la conformación de una mesa interministerial y una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas.

⁷ Disponible en La Tercera: <https://bit.ly/3q9Vx0s>

⁸ Disponible en Radio ADN: [adn.fm/3KPXR9R](https://www.adn.fm/3KPXR9R)

⁹ Disponible en La Tercera: <https://bit.ly/35WY5IM>



Foto: interior.gob.cl

IV. CONCLUSIÓN

Frente a un programa de gobierno que prefiere el diálogo al uso de la fuerza —programa que incluso muestra a las policías como entidades añejas y poco preparadas—, que ha priorizado en su agenda la visita en terreno de su ministra del Interior y Seguridad Pública a la zona de conflicto, que reconoce a los miembros del Wallmapu como víctimas de una opresión y violencia históricas hacia su identidad indígena y que propone la creación de una Comisión de Verdad y Reparación para ellos, la pregunta que naturalmente surge es: ¿por qué no funcionó el diálogo de la ministra en La Araucanía?

La precaria estrategia —si puede llamársele así a una cita improvisada en la agenda ministerial— no se concretó porque para dialogar se necesitan una serie de condiciones idóneas previas que permitan el debate de ideas, siendo la más básica de estas el contar con dos partes dispuestas a conversar.

Mostrar interés en el conflicto en La Araucanía a través de una visita territorial rápida de las autoridades no es suficiente para enfrentar seriamente un conflicto que por años ha atemorizado a las numerosas familias y emprendedores chilenos, de origen indígena o no, que viven en dicha zona. Es más, tras los hechos de violencia, quedó en evidencia que más que ser parte de una agenda planificada de diálogo, la visita se tradujo en una sencilla improvisación revestida de ingenuidad, y oportunismo. El incumplimiento de los protocolos de las comunidades del lugar y el haber hecho caso omiso a las advertencias previas de las policías —verdaderos expertos en la materia— no es más que la muestra de una desvergonzada superioridad moral del gobierno en el entendimiento de lo que implica el conflicto.

Existen serias dudas respecto de si el gobierno —electo democráticamente para representar al Estado de Chile— tiene posibilidades de lograr la paz en La Araucanía únicamente a

través del diálogo en circunstancias en que sus interlocutores enarbolan como bandera de lucha y de manera expresa el desconocimiento del estado de derecho chileno por su supuesta ilegitimidad de origen.

En el caso específico de quienes dispararon contra la comitiva ministerial, se trata de grupos armados indígenas que por la fuerza han logrado obtener un control territorial de zonas que en la práctica parecieran ser autónomas al ordenamiento jurídico del país. El hecho de que el gobierno no haya presentado la querrela correspondiente, desde un punto de vista político, es sinónimo de reconocer esa autonomía territorial de facto y es tratar con desigualdad ante la ley a quienes conspiraron para atacar con armas automáticas a los máximos representantes del Estado de Chile. Ciertamente, en casos como el vivido por la ministra Siches en La Araucanía, el diálogo se ha transformado en una excusa para sostener la impunidad de grupos armados que han torcido la mano de la justicia y la democracia en estas zonas de conflicto.

Así, en menos de una semana de gobierno, la administración del presidente Boric ha dejado en evidencia graves contradicciones que no tienen una salida fácil.

En primer lugar, llama la atención el lenguaje utilizado por las autoridades para referirse a quiénes los atacaron en el sur: “Wallmapu”. La palabra hace referencia al antiguo territorio mapuche, previo a la colonización del siglo XIX. Así, al utilizar dicha palabra para referirse a La Araucanía, el gobierno está literalmente reconociendo la autonomía territorial y la supuesta opresión histórica del estado de derecho chileno en contra de dicho grupo armado. En definitiva, la utilización de ese lenguaje no solo se traduce en un gesto simbólico de multiculturalidad, es literalmente adherir a una causa. En consecuencia, y tomando en consideración el hecho de que el Wallmapu no es una entidad reconocida por el estado de Chile, surge la duda central de si el gobierno está de acuerdo con el estado de derecho chileno o con el Wallmapu. Ante la creciente violencia en la zona, urge una definición al respecto.

En segundo lugar, cabe recordar la escena en que uno de los acompañantes de la comitiva ministerial levanta la bandera mapuche mientras recibían balazos. ¿Qué habrán sentido los chilenos que son víctimas de esa violencia armada en la zona de forma periódica al presenciar dicha imagen de contenido ambiguo de parte de sus autoridades? ¿Cómo interpretarán ese gesto los miembros de otras comunidades que sí están dispuestas al diálogo porque no consideran que el hecho de ser chileno sea contrario o incompatible con el respeto y defensa de su identidad indígena? Lo decepcionante es que hoy son los grupos armados quienes protagonizan esta historia y son visibilizados como víctimas que merecen la impunidad sin importar sus acciones. Los problemas reales de los pueblos indígenas siguen ocultos y sin resolver, al igual que aquellas comunidades que sí están dispuestas al diálogo para alcanzar la paz.

En tercer lugar, resulta interesante citar la reacción de la ministra Vallejos al tomar conocimiento de los hechos acaecidos: “el que crea que puede intimidar a la ministra Siches está muy equivocado”¹⁰. Sin embargo, esto no se trata de la ministra Siches ni del gobierno del presidente Boric, sino que se trata de una ofensiva por parte de sus agresores en contra del Estado chileno del cuál, tanto la ministra Vallejos como la ministra Siches, son representantes de primera línea. Frente a eso, el haber enarbolado la bandera mapuche y el sostener una mirada simplista de juzgar esta acción violenta como un ataque en contra de una ministra o de un gobierno en particular, es evidencia de la profunda ignorancia de esta administración respecto de la complejidad y las implicancias que dan paso al conflicto indígena en la macrozona sur. La falta de comprensión respecto de la gravedad de la materia y la superioridad moral demostrada por la comitiva al asistir a una zona sin organización previa y obviando las advertencias de las policías por considerarlas incompetentes —tal y como lo demuestra el programa de seguridad del gobierno— explican en gran parte el fracaso no solo de la reunión sino probablemente de una estrategia enfocada únicamente en el diálogo y la impunidad de los grupos violentistas.

¹⁰ Disponible en: <https://bit.ly/3q6GjcP>



Foto: t13.cl

En definitiva, el levantar una bandera mapuche mientras la comitiva ministerial que representaba el Estado de Chile escapaba de la emboscada, el optar por no querellarse contra los atacantes y el referirse constantemente en sus discursos al Wallmapu pareciera ser muestra de que es probable de que la ministra Siches no esté de parte de aquello que su cargo representa en esencia: el Estado de Chile.

Luego de estas numerosas contradicciones del gobierno, ¿cómo podrá la autoridad asegurar la paz para aquellos grupos no armados que sufren por la violencia diaria en esa zona?

Ante esto, surge otra duda relevante: ¿son el diálogo y la aplicación de la ley caminos incompatibles entre sí frente a este conflicto? Claramente, un programa de gobierno que propone el diálogo no puede obviar la legítima aplicación y ejecución de ley sin debilitar gravemente el Estado de Derecho. El respeto y priorización del diálogo como método para resolver el conflicto no impide el ejercicio de los medios legítimos que nuestro estado de derecho contempla para el resguardo del orden público.

El programa de gobierno y el enfoque de sus propuestas en materia de seguridad están teñidas de una ideología

que refleja la mencionada contradicción de la actual administración, la que quedó en evidencia luego del resultado de la visita ministerial a La Araucanía, puesto que no basta con priorizar el diálogo en desmedro del uso legítimo de la fuerza pública que es propia del estado de derecho. A pesar de que en un inicio la ministra descartó las advertencias de Carabineros y rechazó su ayuda, frente a una grave situación de violencia y desorden público, Carabineros demostró la correcta ejecución de sus protocolos en la protección de las autoridades ministeriales.

Si bien, como toda institución humana, Carabineros y las Policías en general requieren de una cierta modernización para hacer más efectivo su actuar para enfrentar la violencia, lo cierto es que su refundación desde una hoja en blanco pareciera responder más a motivos ideológicos que a una necesidad real de la institución. Fue ese sentimiento de superioridad que implica solucionar los temas con refundaciones institucionales desde cero es lo que llevó a la izquierda del nuevo gobierno a tropezarse con una realidad que no coincidía con el mundo ideal que en sus promesas de campaña se plantea.




Capullo 2240, Providencia.

www.fjguzman.cl

 /FundacionJaimeGuzmanE

 @FundJaimeGuzman

 @fundacionjaimeguzman